

III. POLÍTICAS COMERCIALES POR MEDIDAS

1) Visión general

1. Desde 1989 El Salvador ha pasado de una política orientada hacia el interior a una orientada mucho más acentuadamente hacia el exterior, basada en la liberalización de las importaciones, la desregulación interna y el crecimiento impulsado por la exportación. En virtud del programa de reformas se ha simplificado tanto el procedimiento de importación como el de exportación, la estructura arancelaria ha experimentado una modificación sustancial y ha desaparecido la mayoría de los obstáculos no arancelarios. Se han adoptado también medidas para desregular la economía nacional. Sin embargo, subsisten algunas licencias de importación y, además, las formalidades para las importaciones siguen siendo algo engorrosas. Parece necesario realizar mayores esfuerzos en la esfera de la propiedad intelectual y de la política de la competencia (antitrust).

2) Medidas que afectan directamente a las importaciones

i) Registro, documentación y reglas de origen

2. Todas las importaciones efectuadas en El Salvador exigen los siguientes documentos: un certificado de importación (póliza de importación), que es una declaración jurada de las mercancías importadas; una factura (factura comercial); y un certificado de expedición o carta de porte (conocimiento de embarque). Es necesario un certificado de origen sólo en determinados casos.

3. Las facturas comerciales, junto con los conocimientos de embarque pertinentes, se envían directamente al importador, quien presenta los documentos a la oficina de aduanas correspondiente. Si se precisa la autenticación consular (legalización) de las mercancías, el original y siete copias (en español) han de presentarse al consulado que expide la certificación. El conocimiento de embarque (el original y dos copias), firmado por la empresa naviera, debe contener por lo menos las principales informaciones que se exigen en la factura comercial. Para las expediciones por vía aérea se necesitan una carta de porte aéreo (en lugar de un conocimiento de embarque) con el número de copias que precise el importador y la compañía aérea.

4. Reglas de origen: Sólo se necesitan certificados de origen para las mercancías objeto de un trato arancelario preferencial, es decir, las mercancías provenientes de países del MCCA y Panamá. Las reglas de origen aplicadas a los países centroamericanos son las estipuladas en el Tratado General de Integración Económica de Centroamérica y el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías.¹ El método utilizado para determinar el origen es el de la transformación sustancial (es decir, un cambio en la clasificación arancelaria). El cambio necesario en la clasificación arancelaria puede corresponder al nivel de 2, 4, 6 u 8 dígitos del Arancel Centroamericano de Importación (SAC). Las reglas de origen para las mercancías provenientes de Panamá son las estipuladas en el Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial con la República de Panamá.

5. El tiempo que exigen las formalidades aduaneras y el despacho de las mercancías importadas varía de uno a cuatro días, según la oficina de aduanas de que se trate. El Gobierno ha indicado que normalmente las formalidades en la aduana aérea exigen como máximo un día, en la aduana marítima tres días y en cualquiera de las demás aduanas cuatro días.

¹Acuerdo Ejecutivo N° 799, Diario Oficial N° 329, de 21 de diciembre de 1995.

6. Las mercancías en tránsito están exentas del pago de derechos de aduana si se presenta una declaración o documento con validez en otros países de la región. El transportista es responsable de la manipulación de esas mercancías hasta su destino final, y también tiene la responsabilidad de la observancia de todos los requisitos del régimen de tránsito. En caso de que las mercancías no se transporten en su totalidad a su destino final, el transportista es responsable de los derechos y aranceles que deban satisfacerse por las mercancías perdidas. Las mercancías en tránsito pueden transferirse a otro régimen de importación siempre que se cumplan todos los requisitos legales del nuevo régimen, por ejemplo, pueden despacharse de aduana para su venta en el país siempre que se paguen los aranceles y cualquier impuesto en frontera que sea pertinente.

7. Admisión temporal de las importaciones: en determinadas circunstancias concretas las autoridades aduaneras pueden autorizar la importación temporal de mercancías con una suspensión parcial o total de derechos de aduana, impuestos y otros gravámenes, por ejemplo, las mercancías destinadas a su exhibición en una feria comercial. Es una condición de ese régimen que las mercancías se reexporten en el plazo de seis meses sin haber experimentado ninguna modificación o transformación, con la excepción de la depreciación normal causada por el uso. Debe depositarse una garantía equivalente a todos los derechos de aduana, impuestos y otros gravámenes que sería necesario satisfacer si no se reexportasen las mercancías dentro del plazo fijado. La garantía se devuelve cuando las mercancías han sido reexportadas.

8. Las mercancías que van a importarse en el territorio nacional pueden almacenarse en almacenes públicos o privados bajo la supervisión de la aduana, con exención de derechos arancelarios y de cualquier otro gravamen.

ii) Valoración en aduana

9. La valoración de las mercancías importadas está basada actualmente en el anexo B del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, que a su vez está basado en el sistema de valoración de Bruselas. El valor aduanero de las mercancías en El Salvador es el precio "normal" de la mercancía, que se define como el precio determinado por la oferta y la demanda en un régimen de libre competencia en el momento que se realiza la importación de la mercancía.² El precio que figura en la factura se acepta usualmente como el precio "normal"³, salvo que la transacción se realice en condiciones de competencia imperfecta. En ese caso las autoridades pueden establecer el precio "normal" sobre la base del precio fijado en condiciones de competencia perfecta, el precio de venta probable, el precio real de la transacción y los precios fijados sobre una base contractual.⁴ Están en proyecto nuevas medidas legislativas para permitir la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de la Ronda Uruguay sobre la Valoración en Aduana dentro del plazo de cinco años concedido a los países en desarrollo.⁵

²Artículo 1, Anexo B del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano: Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías.

³Artículo 4, Anexo B del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano: Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías.

⁴Artículo 13, Anexo B del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano: Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías. Para una definición detallada de esos precios, véase el documento L/6391 del GATT, de fecha 22 de septiembre de 1988, adhesión provisional de El Salvador.

⁵Párrafo 1 del artículo 20, Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994.

10. Las decisiones de la aduana pueden apelarse ante el Director de Aduanas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de adopción de la decisión, y el Director debe llegar a una conclusión dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la apelación. En caso de que el Director no pueda llegar a una conclusión dentro del plazo fijado, el apelante puede recurrir ante el Comité Nacional de Valoración Aduanera.⁶ El Comité debe adoptar una decisión dentro del plazo de 60 días contado a partir de la fecha de la apelación. Si el apelante sigue sin estar de acuerdo con esa decisión, puede iniciar acciones legales ante los tribunales nacionales.⁷

11. Según las autoridades no existe un procedimiento para la verificación de los valores excepto en el caso de los automóviles usados. Si surge alguna duda acerca del valor de la mercancía, se envía una muestra al Departamento de Valoración, donde se estimará su valor. Sin embargo, normalmente la mercancía se despacha de aduanas de manera inmediata y cualquier discrepancia que surja acerca del pago de los derechos se soluciona posteriormente.

12. Precios mínimos de importación: La Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías (Anexo B) permite la utilización de precios mínimos o precios de referencia para la determinación del valor a efectos de los derechos de aduana.

13. La valoración de un automóvil nuevo se basa en el precio a que el fabricante lo vende al agente, es decir, el precio al por mayor. El procedimiento de valoración de los automóviles usados se basa en los precios indicados en determinadas publicaciones especializadas, tales como: Automobile Red Book, Older Car Red Book, Truck Blue Book, Tractor and Implement Blue Book, Motorcycle Red Book, etc.⁸ En caso de que no figure un precio de referencia en esos manuales, el automóvil se valorará entonces según el precio del mismo vehículo en el país de origen. Concretamente, para los vehículos comprendidos en las líneas arancelarias 87.03, 87.04.21 y 87.04.31, el valor que debe utilizarse es el precio al por menor recomendado por el fabricante para un vehículo nuevo, menos un 12 por ciento y la depreciación. Para todos los demás vehículos usados el valor que ha de utilizarse es el valor medio al por menor sin tomar en cuenta la depreciación, el transporte y el costo del seguro.⁹

14. En los últimos cinco años las aduanas se han computadorizado para agilizar el procedimiento. La finalidad es crear un servicio múltiple análogo al que ya existe para las exportaciones (sección 3)) con el fin de hacer más rápidos los procedimientos de importación. Según el Banco Mundial, los lentos y complicados procedimientos de importación (verificación de documentos, adquisición de certificados y valoración de las mercancías) son los más importantes obstáculos que todavía se oponen al comercio, lo que explica la necesidad de acelerar el proceso de reforma aduanera.¹⁰

⁶Artículo 23, Anexo B del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano: Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías.

⁷Artículo 25, Anexo B del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano: Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías.

⁸Artículo 3, Decreto N° 383, Diario Oficial N° 125.

⁹Decreto N° 383, Diario Oficial N° 125, de 7 de julio de 1995.

¹⁰Banco Mundial (1995).

iii) Aranceles

a) Estructura

15. En 1993 El Salvador adoptó el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), basado en el Sistema Armonizado (SA), con unas 5.800 líneas al nivel de 8 dígitos. El SAC se divide en tres partes: en la parte I figuran las líneas para las que se negoció un arancel uniforme; la parte II contiene todos los aranceles que están en proceso de armonización, y en la parte III del SAC se han incluido las mercancías cuyos aranceles no están armonizados y que pueden modificarse en el plano nacional.

16. Los aranceles que actualmente aplica El Salvador se distribuyen en siete escalones, con tipos de un 1, un 5, un 10, un 15, un 20, un 25 y un 30 por ciento. Todos los aranceles son *ad valorem* y se aplican al valor c.i.f. de las mercancías importadas. Su aplicación es uniforme durante todo el año y no existen variaciones estacionales.

b) Niveles arancelarios medios y franja arancelaria

17. La racionalización de la estructura arancelaria comenzó en El Salvador en 1989 y ha continuado hasta 1995. Con anterioridad la franja arancelaria iba de un 5 a un 290 por ciento, con un promedio de un 21,9 por ciento. Como consecuencia de las continuas reformas, el promedio simple se redujo aún más de un 12,3 por ciento en 1992 a un 10,1 por ciento en 1995 y la franja de derechos también se redujo de un 0-35 por ciento a un 1-30 por ciento.¹¹

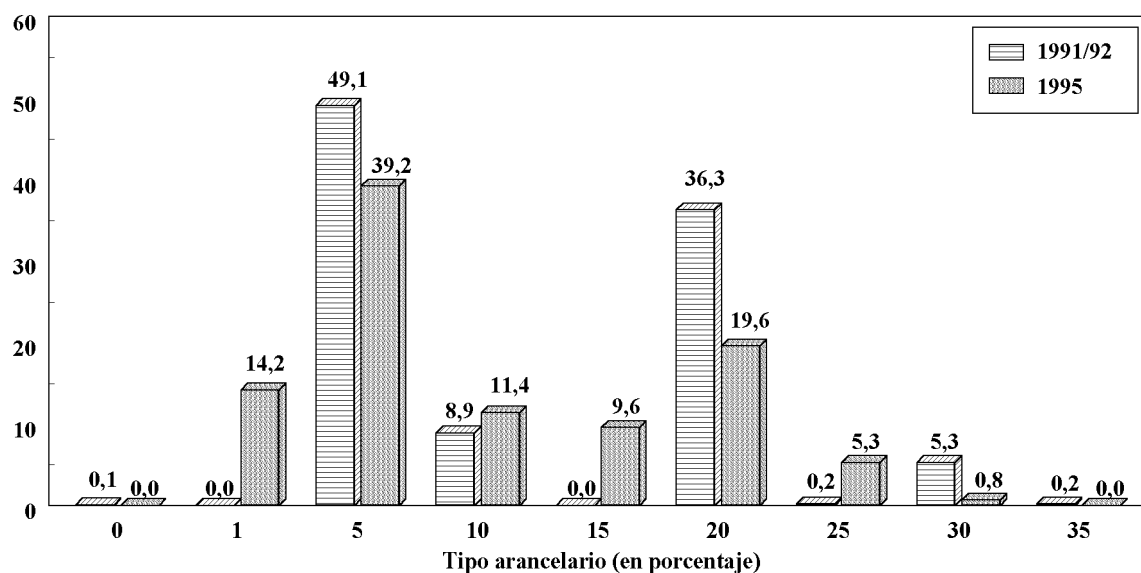
18. El gráfico III.1 muestra que la principal modificación de la estructura arancelaria durante este período ha sido el incremento sustancial de las líneas arancelarias que están gravadas con un derecho de un 1 por ciento, aplicado a los bienes de equipo. Ha habido también una disminución considerable del número de líneas gravadas con un derecho de un 20 por ciento. Además, el derecho de un 30 por ciento, que con anterioridad se aplicaba a un 5,3 por ciento de todas las líneas arancelarias, se impone en 1995 a sólo un 0,8 por ciento de todas las líneas arancelarias. Los aranceles más elevados recaen principalmente sobre los textiles, las bebidas alcohólicas, los cosméticos y los vehículos automóviles. Dentro del sector de las manufacturas, los dos subsectores más fuertemente protegidos con aranceles son el de los textiles, las prendas de vestir y los artículos de cuero, y el de los productos alimenticios, las bebidas y el tabaco. La protección arancelaria del sector agrícola es más acentuada que la del sector manufacturero: la agricultura y la ganadería tienen un tipo arancelario medio de un 12,7 por ciento, mientras que el tipo medio de las manufacturas es de un 10,1 por ciento (gráfico III.2). Esa diferencia sería aún mayor si se incluyesen en la agricultura los productos alimenticios, las bebidas y el tabaco, a los que se aplica un arancel medio de un 15,2 por ciento. Si bien se han logrado sustanciales progresos en la disminución de la dispersión arancelaria desde 1989, el coeficiente de variación de un 75,2 por ciento muestra que esa dispersión es todavía importante. Esa cuestión se resolverá mediante la reducción actualmente proyectada de los tipos arancelarios y la dispersión a una franja de un 0-15 por ciento para 1999.¹²

¹¹El promedio de 1992 se basa en la NAUCA II, la nomenclatura utilizada en Centroamérica hasta que en 1993 se adoptó el Sistema Armonizado.

¹²A principios de 1996 se había pensado reducir los aranceles a una franja de un 1-6 por ciento para 1999, pero esa propuesta quedó desechada posteriormente.

Gráfico III.1 Distribución de los tipos arancelarios, 1991/92 y 1995

Porcentaje de líneas



Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC basadas en datos del Gobierno.

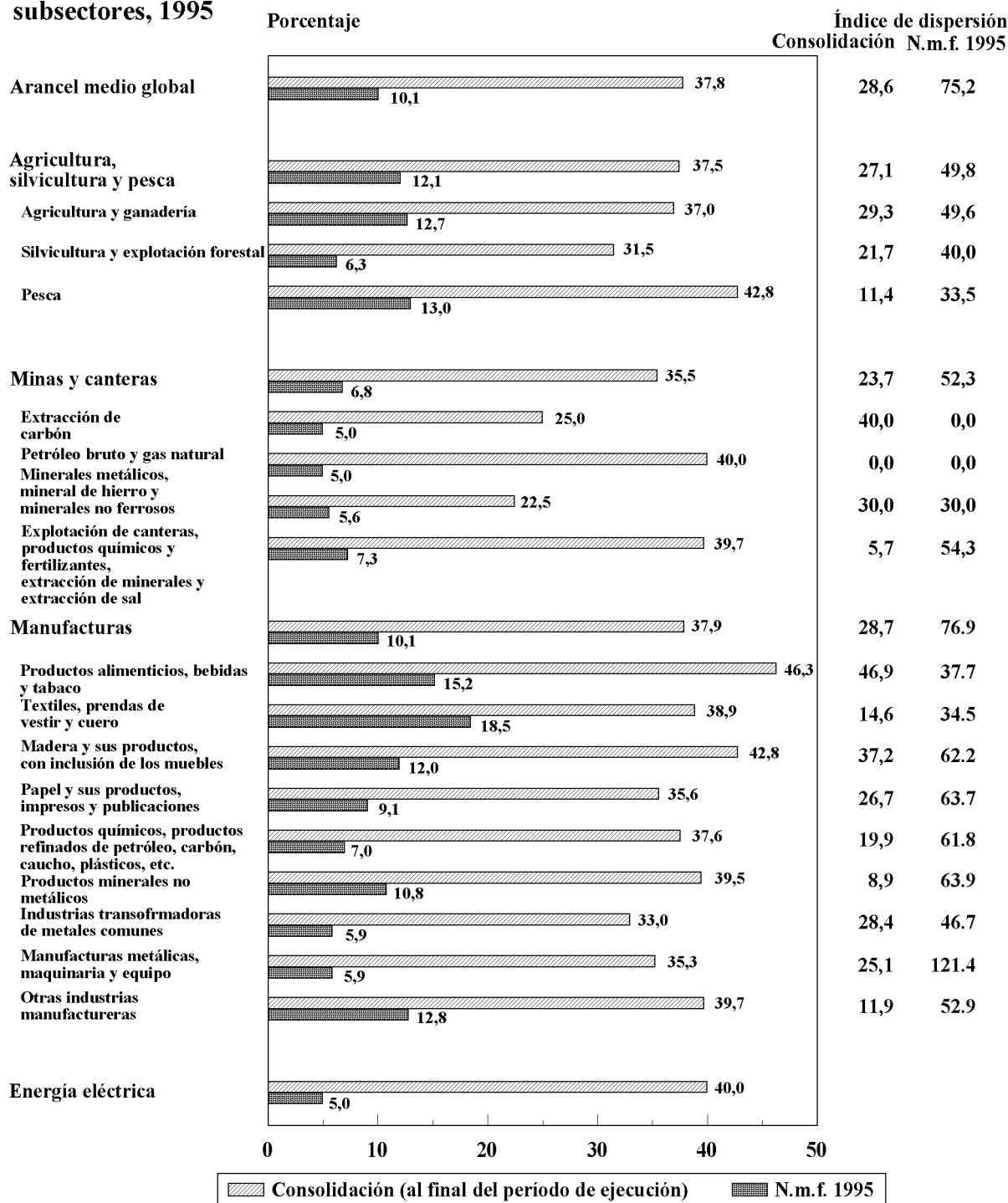
c) Progresividad arancelaria

19. En el arancel actualmente aplicado, los derechos arancelarios medios aplicados a los insumos son de un 7,6 por ciento, a los productos semielaborados un 8,4 por ciento y a los productos totalmente elaborados un 12,5 por ciento. Como se muestra en el cuadro AIII.1, la progresividad arancelaria es mayor en sectores tales como los textiles, los productos de cuero, los productos de madera, y los productos de papel, donde la protección aumenta por lo menos un 10 por ciento entre la primera etapa de la producción y la final. Ese tipo de progresividad arancelaria implica normalmente que el valor añadido en la elaboración disfruta de una protección efectiva más elevada que la indicada por la protección nominal.

d) Consolidaciones arancelarias de la Ronda Uruguay

20. En la Ronda Uruguay El Salvador consolidó todas las líneas arancelarias contenidas en los capítulos 1 a 97 del Sistema Armonizado en un 40 por ciento, salvo los productos agrícolas y las excepciones estipuladas en el momento de la adhesión en los anexos A y B del Protocolo de Adhesión. El tipo consolidado medio global, con esas excepciones, es de un 37,8 por ciento. Como se muestra en el gráfico III.3, alrededor de un 72 por ciento de las líneas arancelarias están consolidadas en un 40 por ciento, aproximadamente un 22,3 por ciento están consolidadas a tipos más bajos, y sólo un 5,8 por ciento de las líneas están consolidadas a tipos superiores a un 40 por ciento. Esos tipos consolidados elevados se aplican principalmente a las excepciones incluidas en el anexo B y a los productos agrícolas objeto del proceso de arancelización. Por ejemplo, el tipo consolidado más elevado de un 164,4 por ciento se aplica a las aves de corral (aplicable a partir del año 2004). Los sectores que han sido consolidados a tipos superiores a los medios son principalmente manufacturas tales como los productos alimenticios, las bebidas y el tabaco, la madera y sus productos, y los minerales no metálicos. La pesca también muestra una elevada protección potencial con un tipo consolidado de

un 42,8 por ciento. El arancel que actualmente aplica El Salvador es sustancialmente inferior a los tipos arancelarios consolidados de todas las líneas arancelarias (gráfico III.2).

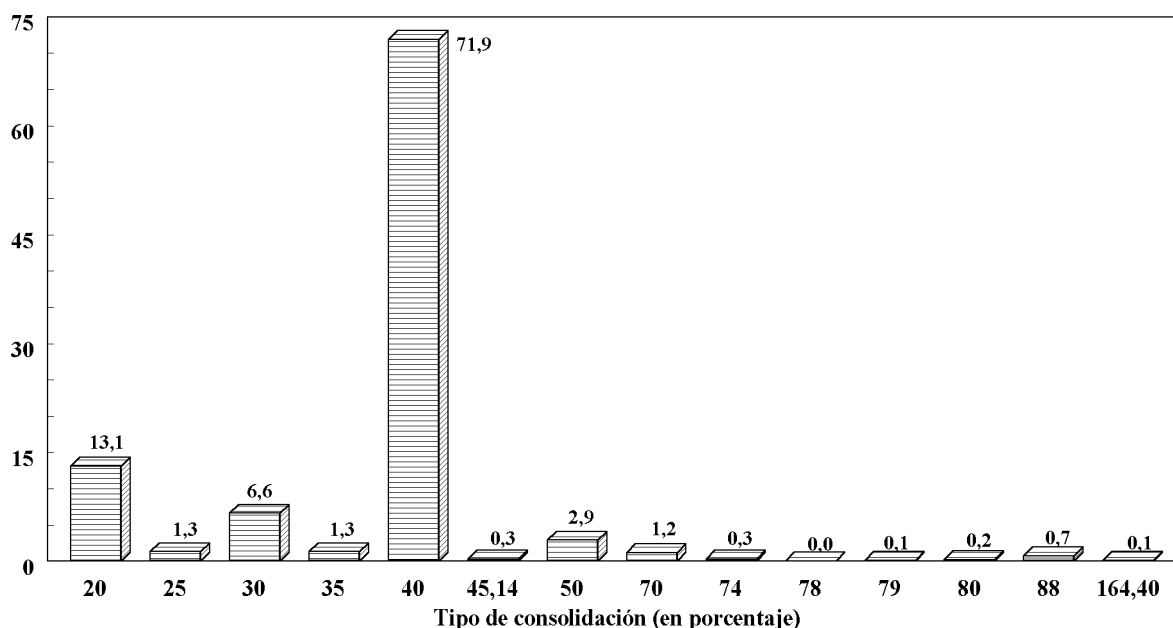
Gráfico III.2**Niveles arancelarios medios y consolidaciones por sectores y determinados subsectores, 1995**

Nota: El índice de dispersión (o coeficiente de variación), expresado en porcentaje, se obtiene dividiendo la desviación típica por la media. El índice mide la dispersión relativa y cuanto más elevado sea, mayor dispersión tiene la estructura arancelaria.

Fuente: Gobierno de El Salvador y cálculos de la Secretaría de la OMC.

Gráfico III.3 Distribución de los tipos de las consolidaciones al final del período de ejecución

Porcentajes de las líneas



Fuente: Gobierno de El Salvador y cálculos de la Secretaría de la OMC.

21. En 1993 El Salvador solicitó el derecho a modificar su Lista LXXXVII durante el período de tres años iniciado el 1º de enero de 1994.¹³

e) Aranceles estacionales

22. En la actualidad El Salvador no tiene aranceles estacionales. Sin embargo, la imposición de un derecho estacional para el maíz amarillo (partida 1005.90.20 del SA) es objeto de consideración. En caso de que se adoptase la imposición de ese derecho, la variación precisa de los tipos dependería de la oferta nacional de sorgo en el país, pues el sorgo y el maíz amarillo son productos mutuamente sustitutivos en la elaboración de alimentos para animales, especialmente para las aves de corral.

f) Importación en condiciones de favor

23. Según el artículo 21 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano sólo se permiten concesiones arancelarias en determinados casos muy concretos, como la importación de efectos personales de nacionales que vuelven definitivamente al país y las mercancías comprendidas en acuerdos comerciales preferenciales de carácter regional o bilateral. También se otorgan concesiones arancelarias a las industrias que realizan su producción en un régimen de zona franca o de recinto fiscal.

¹³Documento TAR/250 del GATT, de 23 de diciembre de 1993.

g) Preferencias arancelarias

24. En general, El Salvador aplica el SAC a todos los países con excepción de los centroamericanos. Los productos originarios del resto de Centroamérica o allí producidos se importan en El Salvador con exención de derechos como pertenecientes al MCCA. Las excepciones a la importación con la exención de derechos figuran en el anexo A. Sin embargo, algunas de las mercancías incluidas en ese anexo pueden importarse con exención de derechos mediante el requisito de una licencia de importación. Algunos productos procedentes de Panamá se importan en El Salvador con un trato preferencial en el marco del Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial con Panamá. Sin embargo, El Salvador intenta renegociar ese Tratado desde 1995.

25. El Salvador no aplica a ningún país un trato arancelario que sea menos favorable que el trato n.m.f.

iv) Contingentes arancelarios

26. Únicamente existen contingentes arancelarios para los productos agrícolas que hayan sido objeto del proceso de arancelización como resultado de la Ronda Uruguay. Los derechos para las importaciones realizadas en el marco del contingente se han fijado en un 20, 30, 40 y 50 por ciento. Sin embargo, los derechos para las importaciones que rebasen el contingente son sustancialmente más elevados aunque nunca se han aplicado, pues las importaciones no han excedido hasta el momento de los niveles de los contingentes. El Salvador no ha enviado todavía una notificación a la OMC sobre la administración de los contingentes arancelarios, pues no se ha determinado aún la manera en que esos contingentes deben administrarse.

v) Gravámenes variables a la importación

27. El Salvador no aplica gravámenes variables a la importación.

vi) Otros gravámenes y recargos

28. La mayoría de las importaciones deben satisfacer un impuesto sobre el valor añadido (IVA) de un 13 por ciento. Ese impuesto grava el valor final de la importación con derechos pagados.¹⁴ Entre las mercancías exentas del pago del IVA figuran: las judías, el maíz, el arroz, la leche, las medicinas y los servicios básicos (capítulo I). Todas las importaciones que realicen instituciones o personas físicas que disfruten de estatuto diplomático están también exentas del pago del IVA.¹⁵

29. Un corto número de productos importados o de fabricación nacional están gravados con impuestos adicionales. Los sacos y talegas de fibras sintéticas vacíos están sujetos a un impuesto de un 80 por ciento calculado sobre el precio de los sacos y talegas de fibras naturales. Los sacos o talegas de fibras sintéticas destinados al almacenamiento de azúcar, sal y piensos de fabricación nacional están exentos de ese impuesto¹⁶, lo mismo que los sacos y talegas utilizados como material de embalaje de mercancías importadas.

¹⁴Decreto N° 495, de 31 de marzo de 1993.

¹⁵Decreto N° 296, Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de 24 de julio de 1992.

¹⁶Decreto N° 235, de 23 de diciembre de 1985.

30. Las bebidas gaseosas o endulzadas deben satisfacer un impuesto *ad valorem* de un 10 por ciento, sobre la base del precio sugerido por el productor, importador o el minorista.¹⁷ Los importadores deben pagar ese impuesto en el momento de la importación. Ese derecho se consigna en la póliza de importación. El IVA estandar de un 13 por ciento para esas bebidas se calcula sobre el valor c.i.f. más el derecho de importación más el impuesto *ad valorem* de un 10 por ciento.¹⁸

31. Las bebidas alcohólicas están sujetas a dos impuestos adicionales. En primer lugar, un impuesto basado en el contenido alcohólico de la bebida, que en la actualidad es de C 0,05 del porcentaje por volumen de contenido alcohólico. En segundo lugar, se percibe un impuesto *ad valorem* de un 30 por ciento (un 25 por ciento en el caso de la cerveza) sobre la base del precio al por menor declarado por el productor o importador. Esos impuestos se perciben en el momento de la importación.

32. Los derechos consulares, que antes se percibían en los consulados de El Salvador, los cobran ahora directamente las aduanas por la autenticación de la factura comercial y el conocimiento de embarque. El derecho correspondiente a la autenticación de la factura comercial (derecho consular) está fijado en 2 dólares EE.UU. Según las autoridades, el derecho percibido por la autenticación del conocimiento de embarque (factura consular) varía según el valor de la importación que figura en la factura comercial y es de 1 dólar EE.UU. por cada 500 dólares EE.UU. de valor, con un máximo de 30 dólares EE.UU. El costo de una carta de crédito depende del tipo de financiación que el banco privado haya concedido al importador (cuadro III.1).

vii) Importaciones prohibidas

33. Las importaciones prohibidas abarcan en El Salvador varios productos, entre los que se cuentan: el material subversivo y pornográfico; las sustancias abortivas; las máquinas tragaperras; el opio con menos de un 9 por ciento de morfina, la escoria y las cenizas de opio y cualquier artefacto para fumarlo; el papel para liar cigarrillos que no lleve la marca correspondiente; las máquinas o instrumentos para fabricar monedas, falsificar billetes, pulir monedas de plata de menos de 0,9 de ancho, y cualquier clase de ficha que pueda circular como moneda¹⁹; y el café que pueda utilizarse como semilla para una plantación.²⁰

34. Algunas mercancías son objeto de una "prohibición de importación limitada", lo que significa que únicamente el Estado puede importarlas. Entre esas mercancías figuran: las municiones, los aeroplanos y buques militares, las armas y silenciadores, y las máscaras antigás de uso militar; el aguardiente de caña de azúcar; el nitrato potásico (sal de nitrato, salpetre, kalium nitrosum); el papel con marca para hacer cigarrillos; los sellos fiscales, municipales y postales; y las monedas de níquel de circulación legal.²¹

¹⁷Decreto N° 641, Ley del Impuesto sobre las Bebidas Gaseosas Simples o Endulzadas, de 22 de febrero de 1996.

¹⁸Instructivo N° 2093, Ministerio de Hacienda, de 11 de marzo de 1996.

¹⁹Decreto N° 647, Diario Oficial N° 113, de 20 de diciembre de 1990 (regla X, rubro "A").

²⁰Decreto N° 647, Diario Oficial N° 113, de 20 de diciembre de 1990 (capítulo 12).

²¹Decreto N° 647, Diario Oficial N° 113, de 20 de diciembre de 1990 (regla X, rubro "B").

Cuadro III.1

Estructura de los recargos sobre las importaciones de determinados productos, 1995

(En porcentaje y dólares EE.UU.)

Descripción	Maíz amarillo 1005.90.20		Productos laminados planos de acero inoxidable 7219.24.00		Automóviles 8703.23.91	
	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor
1. Valor f.o.b.		309,50		2.000,00		25.232,00
2. Flete (sobre el punto 1)	15,33	47,45	18,00	361,12	13,58	3.428,46
3. Seguro (sobre el punto 1)	1,27	3,93	1,30	25,97	1,25	315,26
4. Valor c.i.f. (sobre puntos 1, 2, y 3)		360,88		2.387,89		28.975,72
5. Derecho de importación (sobre el punto 4)	5,00	18,04	5,00	119,35	25,00	7.243,93
6. Total parcial		378,92		2.506,44		36.219,65
7. Costo de la carta de crédito (sobre el punto 1)	13,83	42,82	2,56	51,28	0,72	180,63
8. Costo de los trámites aduaneros (sobre el punto 1)	3,30	10,21	0,51	10,21	0,04	10,21
9. Derechos consulares ^a	17,60	54,50 ^b	0,45	9,00	0,40	102,50 ^b
10. Valor final de las importaciones		486,45		2.576,93		36.512,99
11. Impuesto sobre el valor añadido (sobre el punto 11)	13,00	63,39	12,90 ^c	332,0	13,00	4.708,56
12. Costo al por mayor en El Salvador		549,68		2.909,43		41.221,55
Equivalente <i>ad valorem</i> de la combinación de todos los recargos sobre el valor f.o.b.	69,33		40,72		53,99	

a Los derechos consulares son de 2 dólares EE.UU. por la certificación de cada factura comercial y de 1 dólar EE.UU. por cada 500 dólares EE.UU. del valor f.o.b. con un máximo de 30 dólares EE.UU.

b Según la información facilitada a la Secretaría, los derechos consulares deben ser como máximo de 30 dólares EE.UU.

c Porcentaje calculado de nuevo por la Secretaría sobre la base de los valores comunicados por el Gobierno.

Fuente: Autoridades aduaneras, Gobierno de El Salvador.

viii) Licencias y autorizaciones de importación

35. Durante los últimos 10 años El Salvador ha eliminado los permisos de importación para una amplia gama de productos. Sin embargo, todavía se necesitan licencias de importación para algunos productos cuando se importan de Centroamérica (véase *infra*). Las importaciones de sacos de yute y sal, precisan de una licencia cualquiera que sea el país del que procedan, mientras que para el azúcar se necesita una "autorización".²²

36. Según el "anexo A" del Tratado General de Integración Económica Centroamericana es necesaria una licencia de importación para la entrada con exención de derechos de determinadas mercancías. Entre esas mercancías figuran: el azúcar (partidas 17.01, 1701.11.00, 1701.91.00 y 1701.99.00 del SA) procedente de cualquiera de los países miembros del MCCA; la harina de trigo (partida 1101.00.00 del SA) importada de Guatemala, Honduras y Nicaragua; y alcohol etílico (partidas 22.07 y 22.08.90.10

²²Decreto N° 647, Diario Oficial N° 113, de 20 de diciembre de 1990 (capítulo 17).

del SA) importado de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.²³ El control de esas importaciones dentro del MCCA es recíproco. En caso de no concederse la licencia de importación, las importaciones quedan sujetas al derecho estipulado en el SAC.

37. El requisito de la licencia de importación para el alcohol etílico se ha suprimido recientemente y todas las importaciones de alcohol, cualquiera que sea su origen, están sujetas a un derecho de importación (por ejemplo, las importaciones procedentes de Centroamérica ya no pueden efectuarse con exención de derechos).²⁴

38. Las importaciones de sacos para el almacenamiento de azúcar (usualmente de tejido) deben ser aprobadas por la Comisión Salvadoreña para el Desarrollo Azucarero (CDA).²⁵ Esas restricciones de la importación no han sido notificadas al Órgano de Supervisión de los Textiles (OST) como se estipula en el artículo 3 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. Según las autoridades, tales restricciones no se han notificado por no haberse aplicado desde la adhesión de El Salvador al GATT en 1991. Se espera que el Decreto de aplicación (Nº 647) sea modificado en breve.

39. El requisito de la autorización para la importación de azúcar se estableció originalmente a causa de las distorsiones que registraba el mercado mundial del azúcar y la importancia del sector azucarero para el empleo dentro del país. Según las autoridades, las solicitudes de autorización para la importación de azúcar las tramita el Ministerio de Economía, que consulta con la CDA antes de expedirlas. Desde 1989 sólo se han presentado al Ministerio de Economía cinco solicitudes de autorización. La Secretaría no tiene noticias del resultado de esas solicitudes, pero los datos del comercio comunicados indican que prácticamente no se han realizado importaciones.²⁶ Las autoridades atribuyen esa falta de importaciones al hecho de que El Salvador es un exportador neto de azúcar.

40. Ese sistema de autorización o de licencia tal vez sea necesario en el futuro con el fin de administrar la asignación de contingentes arancelarios para el azúcar, en caso de que las importaciones tiendan a rebasar el nivel inicial de 3.887,33 toneladas de los contingentes, con unos derechos de un 40 por ciento.²⁷ En espera de una decisión sobre la aplicación de tal sistema, no se ha hecho ninguna notificación a la OMC acerca de la administración de los contingentes arancelarios.

²³Acuerdo Nº 577, Diario Oficial Nº 204, de 6 de noviembre de 1995. Al parecer las limitaciones a la importación con franquicia de determinadas mercancías procedentes de países de Centroamérica se han establecido principalmente por tres razones: en primer lugar, porque algunos de esos productos no son originarios de países del MCCA; en segundo lugar, porque algunos productos se obtienen con insumos subvencionados, como es el caso de la harina de trigo que se produce con trigo importado en virtud de la Ley 480 de los Estados Unidos; y en tercer lugar, por el deseo de proteger el mercado nacional, como sucede en el caso del azúcar y el café (Torres-Rivas, y otros, 1975).

²⁴Decreto Nº 640, Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, de 22 de febrero de 1996, artículo 60.

²⁵Decreto Nº 647, Diario Oficial Nº 113, de 20 de diciembre de 1990 (capítulo 62).

²⁶Oficina de Estadística de las Naciones Unidas (UNSTAT), información procedente de la Base de datos Comtrade para el período 1980-95.

²⁷Este contingente aumentará a 6.478,89 toneladas para el año 2004 con unos derechos contingentarios de un 40 por ciento, mientras que los derechos finales para las importaciones que excedan del contingente seguirán siendo de un 70 por ciento.

41. El Gobierno está actualmente examinando la posibilidad de suprimir la autorización y reducir los derechos aplicados a las importaciones no comprendidas en el contingente de un 88 por ciento en 1996 a un 55 por ciento. Una propuesta anterior también incluía la posibilidad de incrementar los derechos actualmente aplicados de un 20 por ciento a un 55 por ciento sobre todas las importaciones de azúcar. Esos derechos habrían excedido de los consolidados para el contingente, es decir de un 40 por ciento, que se habían negociado en la Ronda Uruguay, lo que habría exigido una renegociación de conformidad con el artículo XXVIII.

42. Es necesario una licencia de importación para la sal, que otorga el Ministerio de Sanidad una vez que se haya determinado el contenido en yodo del mineral.

ix) Contingentes de importación

43. La sacarina y otros productos análogos sólo se pueden importar en cantidades limitadas o para uso médico con el permiso del Consejo Superior de Salud Pública. Ese permiso ha de validarlo la Comisión Salvadoreña para el Desarrollo Azucarero.

44. Existe una restricción cuantitativa legal para la importación de productos lácteos, pues sólo pueden importarse en caso de escasez en el país.²⁸ Sin embargo, esta ley, que está todavía en los repertorios de legislación, parece haber caído en desuso pues, según las autoridades, El Salvador importa productos lácteos sin restricciones.

x) Supervisión de las importaciones

45. No existe en El Salvador ningún mecanismo de supervisión de las importaciones.

xi) Cárteles de importación

46. Existe un cártel de importación para el petróleo crudo, pero las importaciones de productos refinados de petróleo se liberalizaron en 1993.²⁹ También se liberalizaron³⁰ en 1995 todas las importaciones de petróleo bruto y no existe ninguna restricción legal para que otras refinerías participen en el mercado.

xii) Empresas propiedad del Estado

47. Desde 1989, como parte del proceso global de reforma económica, se ha reducido el alcance de las actividades estatales en El Salvador. Antes de las reformas, el Estado desempeñaba un importante papel en la comercialización de las principales cosechas de exportación, el algodón, el azúcar y el café, y en el suministro de servicios. La privatización de la empresa nacional tostadora de café (Coffee Roasting Tower S.A.) quedó terminada en 1995 y el Instituto del Café (INCAFE), la anterior junta de comercialización, fue suprimido en 1989, de manera que todo el proceso de comercialización del café está ahora en manos del sector privado. El Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR), que tenía el monopolio de la comercialización del azúcar, está en curso de ser privatizado. Además, ocho

²⁸Ley N° 3144, Ley de Fomento de Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos y de Regulación de su Expendio, Diario Oficial N° 185, 1960.

²⁹Acuerdo N° 277, Diario Oficial N° 92, 20 de marzo de 1993.

³⁰Acuerdo Ejecutivo, N° 10, 5 de enero de 1995.

de los 11 ingenios azucareros en actividad han sido privatizados, y los restantes tres están en trance de serlo. San Bartolo, la principal zona franca de El Salvador, que con anterioridad pertenecía totalmente al Estado, es ahora de propiedad privada en un 70 por ciento. El Hotel Presidente, uno de los principales hoteles de San Salvador, también fue privatizado en 1991. Coffee Roasting Tower S.A., San Bartolo y el Hotel Presidente pertenecían a la Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN), de propiedad estatal. La mayoría de las empresas que pertenecían a CORSAIN han sido privatizadas. Actualmente CORSAIN posee únicamente un ingenio azucarero y un proyecto de pesquerías, y es accionista de tres empresas manufactureras.³¹

48. En el sector de los servicios la participación del Estado sigue siendo importante, pero en la mayoría de los subsectores existen proyectos para privatizar o el proceso de privatización ya está en curso. Gran parte de los bancos, con la excepción del Banco Hipotecario y el Banco de Fomento Agrícola, han sido privatizados. La Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) está siendo privatizada. La empresa será dividida en dos, que se venderán separadamente con el fin de evitar la creación de un monopolio privado. Se creará un órgano regulador independiente. También se privatizarán algunos de los servicios que presta la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). No parece que exista el proyecto de privatizar la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), que tiene por función la generación y suministro de electricidad, pero el Estado no tiene un monopolio en esta esfera. En cuanto al suministro de agua, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es todavía un monopolio.

49. El descenso del papel del Estado durante los últimos 10 años es sintomático del amplio impulso hacia una economía de mercado y, según las autoridades, ese proceso debe continuar puesto que forma parte del programa de reforma económica global iniciado en 1989. Hasta el momento los principales obstáculos con que ha tropezado la privatización ha sido la falta de experiencia en la ejecución de ese programa y la carencia de recursos financieros. En el pasado las privatizaciones no se realizaban sin disponer de un marco de procedimiento claro. Sin embargo, después de la privatización de la empresa nacional de torrefacción del café, la primera llevada a cabo mediante el mercado de valores, se establecieron procedimientos para la privatización posterior de otras empresas propiedad del Estado, lo que también ha permitido atraer al capital extranjero.

xiii) Comercio de compensación

50. Las actividades de comercio de compensación y trueque de El Salvador están regidas por la Ley de Reactivación de las Exportaciones.³² Las transacciones de compensación deben contar con la aprobación del Banco Central. Sin embargo, esas transacciones no son comunes.

³¹CORSAIN posee un 50 por ciento de Industrias Sintéticas de Centroamérica S.A. (INSINCA), un 22 por ciento de Conductores Eléctricos de Centroamérica S.A. (CONELCA), y un 4,95 por ciento de Sociedad Quality Food S.A.

³²Decreto N° 460, de 15 de marzo de 1990 (artículo 9).

xiv) Normas y otros requisitos técnicos

a) Normas, pruebas y certificación

51. Por la Ley de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)³³ se creó la organización encargada de coordinar la elaboración y adopción de normas en El Salvador. Según el Decreto N° 287 cuando no se hayan aprobado específicamente unas normas técnicas oficiales, El Salvador aplicará las normas internacionales. Por ejemplo, en la actualidad El Salvador utiliza las normas establecidas por el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología (ICITI), el Codex Alimentarius de la FAO/OMS, y en última instancia las normas establecidas por el Consejo para las especificaciones según las cuales los productos hayan sido registrados legalmente. El CONACYT está preparando medidas legislativas para establecer las normas y reglamentaciones técnicas de El Salvador según el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas de la OMC.³⁴ En la preparación de normas y reglamentaciones no se está distinguiendo entre las mercancías importadas y las de producción nacional.

52. El CONACYT también tiene la función de llevar a cabo la prueba de las normas y/o la aprobación de los resultados de las pruebas realizadas en el país exportador. Sin embargo, no existe ningún mecanismo que permita reconocer las pruebas específicas efectuadas en el país exportador. No obstante, el CONACYT exige una certificación expedida por las autoridades de ese país. Después el CONACYT evalúa la certificación con el fin de aprobar las pruebas realizadas en el país exportador. En la actualidad se está preparando la reglamentación relativa al reconocimiento de las pruebas efectuadas en los países exportadores. En el pasado no ha habido ningún caso en el que El Salvador haya considerado inadecuadas las normas internacionales.

53. En El Salvador existen normas específicas para la importación de azúcar, sal y harina de trigo. Desde 1994 es una obligación legal que todo el azúcar producido para el consumo nacional sea fortificado con vitamina A (15 microgramos (50 IU/G)).³⁵ Además, el azúcar fortificado debe ser embalado de manera que se proteja la vitamina. Todas las importaciones de azúcar deben también cumplir ese requisito, de cuya supervisión se encarga el Ministerio de Economía. El azúcar no fortificado puede exportarse y venderse en el mercado nacional sólo si es posible probar que, en ese caso concreto, no está recomendada la fortificación.

54. Para luchar contra la elevada incidencia de las insuficiencias tiroideas en El Salvador³⁶ se ha prescrito que tanto la sal para el consumo humano como para el consumo animal debe estar yodada.³⁷ Así pues, las importaciones de sal han de contener entre 30 y 100 miligramos de yodina por kg.³⁸ Puede importarse sal sin yodina para uso industrial.

³³Decreto Legislativo N° 287.

³⁴Anexo 3, Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.

³⁵Decreto N° 843, Ley de Fortificación del Azúcar con Vitamina "A", Diario Oficial N° 323, de 25 de mayo de 1994.

³⁶El último estudio en materia de nutrición realizado en 1990 puso de relieve que por lo menos un 25 por ciento de la población padecía insuficiencias tiroideas (Bocio Endémico).

³⁷Decreto N° 449, Ley de Yodación de Sal, de 27 de enero de 1993.

³⁸Decreto N° 449, Ley de Yodación de Sal, de 27 de enero de 1993.

55. Para importar sal con o sin yodina es preciso una licencia que expide el Ministerio de Salud Pública siempre que el importador presente los certificados necesarios.³⁹ Se necesita un certificado expedido en el país de origen mediante el cual se especifique el procedimiento utilizado para yodar la sal y la cantidad de yodina empleada. En el caso de la sal no yodada, el importador ha de presentar un certificado justificativo de la necesidad de utilizar en una industria esa sal no yodada. La Dirección General de Salud expide esos certificados. Cuando la sal deba analizarse para confirmar el contenido de yodina, el importador tiene que pagar el costo de la prueba.

56. La harina de trigo tanto importada como de producción nacional (partida 1101.00.00 del SA) debe enriquecerse con vitamina B, hierro y ácido fólico para luchar contra la malnutrición, especialmente de los niños.⁴⁰

57. Para los productos derivados del petróleo se necesita un certificado del análisis destinado a determinar su calidad. Los importadores han de presentar ese certificado sólo la primera vez que realicen una importación.

b) Reglamentos sanitarios y fitosanitarios

58. En el cuadro III.2 figuran las medidas legislativas que determinan y regulan los requisitos sanitarios y fitosanitarios aplicados en El Salvador a las mercancías de producción nacional y a las importadas. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Agricultura tienen a su cargo la aplicación de esos reglamentos.

59. Los productos farmacéuticos o las medicinas patentadas deben ir acompañadas en el momento de la importación de un certificado sanitario expedido por una Cámara de Comercio, una Junta de Sanidad o una organización reconocida que tenga la facultad de expedir esos certificados en el país de origen. Cada envío del producto considerado no es necesario que vaya acompañado del certificado, que sin embargo debe presentarse a las autoridades de El Salvador en el momento de solicitar el registro de los productos farmacéuticos. Una vez que hayan sido registrados, los envíos posteriores de esos productos no necesitan ir acompañados de certificados sanitarios.

60. Los productos químicos y los farmacéuticos sólo se pueden importar si está autorizado su consumo en el país de origen. Todos los documentos necesarios para la importación deben estar certificados por el Ministerio de Agricultura. Es preciso un certificado de análisis para los fertilizantes con el fin de impedir la importación de productos químicos peligrosos, que por su naturaleza resulten difíciles de manipular o eliminar en el caso de que no puedan venderse. En ese certificado ha de especificarse el contenido del producto y su origen. Este análisis puede realizarse en los laboratorios de la aduana o en un laboratorio especializado que se designe a tal efecto a costa del importador.

61. Es necesario un análisis certificado para determinar la pureza de determinados productos: el tocino, la harina de trigo y centeno, el aceite de hígado de bacalao y las bebidas alcohólicas. En sustitución de ese análisis certificado puede analizarse en el laboratorio de la aduana o en otro laboratorio aprobado de El Salvador una muestra del envío considerado.⁴¹ En el caso de las bebidas alcohólicas,

³⁹Información facilitada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

⁴⁰G/TBT/Notif.95.324.

⁴¹Decreto N° 647, Diario Oficial N° 113, de 20 de diciembre de 1990 (Regla VIII).

el certificado de pureza puede expedirse en el país de origen, pero las importaciones deben también registrarse en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.⁴²

Cuadro III.2
Reglamentos sanitarios y fitosanitarios

Disposición	Esfera			Fecha
	Fitosanitaria	Zoosanitaria	Inspección de alimentos	
Ley por la que se crean los servicios para plantas y animales (Decreto Legislativo N° 2690)	X	X		julio de 1958
Ley por la que se promueve la producción higiénica de la leche y los productos lácteos y se regula la comercialización de esos productos (Decreto N° 3144)		X	X	octubre de 1960
Ley de sanidad de las plantas y animales (Decreto Ejecutivo N° 229)	X	X		agosto de 1961
Ley por la que se regula la inspección sanitaria de la carne (Decreto N° 588)		X	X	enero de 1970
Certificación de las semillas y plantas (Decreto N° 229)	X			febrero de 1971
Ley sobre la certificación de las semillas y plantas (Decreto Legislativo N° 279)	X			febrero de 1971
Control de los pesticidas, fertilizantes y productos agrícolas (Decreto Legislativo N° 315)	X	X	X	mayo de 1973
Reglamento para la producción y comercialización de semillas certificadas (Decreto Ejecutivo N° 60)	X			septiembre de 1979
Código de sanidad (Decreto Legislativo N° 955)			X	mayo de 1988
Ley de sanidad de las plantas y animales (Decreto N° 524)	X	X	X	diciembre de 1995

Fuente: Gobierno de El Salvador.

62. Para las semillas no comestibles, las raíces, bulbos y plantas son necesarios certificados sanitarios expedidos por las autoridades agrícolas del país de origen. De no existir el certificado sanitario, el Ministerio de Agricultura fumigará o desinfectará los productos en el momento de su entrada en el país.⁴³ Los sacos o bolsas usados de cáñamo, henequén, yute y fibras similares han de ir acompañados de un certificado de fumigación.⁴⁴

⁴²Decreto N° 640, Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, de 22 de febrero de 1996.

⁴³Enciclopedia del exportador (1994).

⁴⁴Decreto N° 647, Diario Oficial N° 113, de 20 de diciembre de 1990 (capítulo 62).

c) Marcado, etiquetado y embalaje

63. Las normas que hoy se siguen en materia de marcado, etiquetado y embalaje son principalmente las establecidas en la Ley de Protección al Consumidor, que en sus artículos 8 y 12 estipulan que todos los productos (tanto importados como de producción nacional) deben llevar etiquetas indicando los ingredientes utilizados en su preparación y el precio.⁴⁵

64. Además, los cigarrillos de importación deben llevar una etiqueta indicando que han sido importados (importación a El Salvador).⁴⁶ Las bebidas alcohólicas también deben llevar etiquetas especificando el grado de alcohol, la fecha de caducidad, el número del registro sanitario, en caso de ser de producción nacional, o el nombre y el número de registro del importador, de ser de importación, así como una etiqueta indicando que: "El consumo excesivo de este producto es dañino para la salud y crea adicción. Se prohíbe su venta a menores de 18 años."

65. De conformidad con el Código de Salud, existen requisitos especiales de etiquetado para las importaciones de medicinas y productos farmacéuticos; fertilizantes, insecticidas, fungicidas, sustancias repelentes, herbicidas; y medicinas, sueros, vacunas y otros productos biológicos de uso veterinario.⁴⁷

xv) Contratación pública

66. El Salvador no se ha adherido al Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública de la OMC.

67. La Ley General del Presupuesto regula las compras tanto del Gobierno central como de las instituciones autónomas. Sin embargo, las compras del Gobierno central también están regidas por la Ley de Suministro y el Instructivo 6023A, mientras que las instituciones autónomas tienen leyes específicas propias. Esas leyes específicas establecen umbrales diferentes de los fijados para las compras del Gobierno central. También fijan una metodología distinta para los procedimientos de licitación que parece fomentar una mayor competencia.

68. Los contratos del Gobierno central para las compras proyectadas cuyo valor exceda de C 50.000 se someten a licitación pública, a la que pueden concurrir tanto los abastecedores nacionales como los extranjeros. En el caso de los extranjeros es preciso que tengan una representación legal en El Salvador y figuren en el registro del IVA. Según las autoridades, no se exige ningún otro requisito a los extranjeros y no existe discriminación entre ellos y los nacionales.

69. Las compras de instituciones autónomas tales como la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) están reguladas por leyes específicas que fijan umbrales mínimos para las licitaciones públicas. En tales casos, las ofertas pueden ser privadas o públicas, con la participación tanto de nacionales como de extranjeros. Además, las instituciones autónomas pueden organizar licitaciones internacionales cuando las compras se refieran a mercancías que no se produzcan en el país y los contratos excedan de un umbral mínimo.

⁴⁵Decreto N° 267, Diario Oficial N° 219, de 27 de noviembre de 1992.

⁴⁶Capítulo 24, Decreto N° 647, Diario Oficial N° 113, de 20 de diciembre de 1990.

⁴⁷Servicio de información de Dun & Bradstreet (1994).

70. El Gobierno ha descentralizado recientemente la realización de adquisiciones, dando más independencia a los ministerios y otras instituciones oficiales.⁴⁸ Esa mayor independencia se ha otorgado mediante la formación de comisiones de compras. En esas comisiones el departamento de contrataciones de cada institución desempeña un activo papel, puesto que puede determinar mejor las necesidades de la institución. Las comisiones también inician el proceso de organizar las licitaciones y proceder después a las adjudicaciones. La Corte de Cuentas de la República lleva a cabo la auditoría del procedimiento. Cuando una adjudicación es impugnada, puede procederse por la vía administrativa, aunque también es posible interponer un recurso por la vía judicial.

xvi) Prescripciones en materia de contenido nacional

71. Según las autoridades, no existe ninguna reglamentación del contenido nacional en la producción del país.

xvii) Medidas antidumping y compensatorias

72. El procedimiento para la adopción de medidas antidumping y compensatorias figura en el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio⁴⁹, que ha sustituido al Reglamento Centroamericano sobre Prácticas de Comercio Desleal y Cláusulas de Salvaguardia.⁵⁰ Según las autoridades, ese procedimiento se ha establecido de conformidad con los Acuerdos de la OMC.

73. El Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Política Comercial, tramita las reclamaciones relativas a las prácticas comerciales desleales y lleva a cabo investigaciones para determinar si es pertinente adoptar medidas antidumping o compensatorias. Pueden aplicarse derechos antidumping y compensatorios cuando las prácticas comerciales desleales causan, o amenazan causar, un perjuicio al sector o un retraso en el desarrollo de un sector, de conformidad con el Acuerdo de la OMC.

74. Cualquier productor nacional o grupo de productores que se considere perjudicado puede pedir a las autoridades que inicien una investigación. Si la petición de aplicar derechos antidumping y compensatorios no está en conformidad con los Acuerdos de la OMC o no está suficientemente probado el perjuicio, las autoridades no llevarán a cabo la investigación.

75. Pueden adoptarse medidas provisionales durante el curso de la investigación si existe una determinación afirmativa preliminar de la existencia de dumping o de subvención que perjudiquen o puedan perjudicar a un sector. Las medidas provisionales pueden aplicarse por un período máximo de nueve meses. Se pone fin al procedimiento si se determina que el margen de dumping o de subvención es mínimo, o que el volumen de importaciones o el perjuicio son insignificantes.

76. Para los productos originarios de Centroamérica, la Dirección de Política Comercial también realiza investigaciones para determinar la existencia de dumping o subvenciones. La Secretaría para la Integración Económica de Centroamérica (SIECA) sólo interviene cuando la existencia de prácticas comerciales desleales menoscaba el trato preferencial estipulado en el Tratado de Integración Económica Centroamericana y las autoridades del país importador no llevan a cabo la investigación.

⁴⁸Instructivo 6023A, modificado.

⁴⁹Acuerdo N° 808, Diario Oficial N° 237, de 21 de diciembre de 1995.

⁵⁰Acuerdo N° 110, Diario Oficial N° 40, de 26 de febrero de 1993.

77. Las medidas que se apliquen después de la investigación deben ser transitorias y excepcionales, y sólo estarán en vigor mientras exista la situación que las ha motivado. Las medidas definitivas pueden tener una vigencia de cinco años como máximo, a partir de la fecha de la resolución final. Ese plazo sólo puede ampliarse si subsisten las condiciones que dieron lugar a la medida.

78. Los derechos antidumping y compensatorios sólo deben aplicarse a las importaciones objeto de dumping o subvencionadas. Así pues, es necesario especificar cuál es el abastecedor de los productos de manera que la medida no se aplique a todos los abastecedores.

79. Según las autoridades, de conformidad con el artículo 25 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano⁵¹, se impuso un derecho compensatorio de un 10 por ciento a las importaciones de leche provenientes de Costa Rica. La justificación fue que Costa Rica aplicaba un arancel de un 5 por ciento al maíz amarillo, inferior por lo tanto al arancel común centroamericano que se había convenido de un 20 por ciento. El Salvador consideró que esa reducción arancelaria constituía una subvención a la producción de leche. Sin embargo, según la Resolución N° 101 El Salvador ha reducido ahora el arancel aplicado al maíz amarillo a un 1 por ciento, equivalente al arancel vigente en Costa Rica, por lo que ha desaparecido la justificación de la medida.⁵² En los últimos cinco años El Salvador no ha aplicado ninguna otra medida antidumping o compensatoria.

xviii) Medidas de salvaguardia

80. En el plano centroamericano se han aprobado en julio de 1996 nuevas medidas legislativas relativas a las salvaguardias mediante el Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia.⁵³ La finalidad de ese Reglamento es establecer el procedimiento para la aplicación del artículo XIX del GATT de 1994, el Acuerdo de la OMC, el Protocolo de Guatemala y el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.

81. Según la legislación, antes de que se adopten medidas de salvaguardia debe establecerse que las importaciones provenientes de un tercer país han alcanzado un nivel tal (en términos absolutos o relativos respecto de la producción nacional) y se llevan a cabo en condiciones tales que causan o amenazan causar un perjuicio grave a un sector de la economía que produce mercancías similares o es un competidor directo. Para que se adopte una medida de salvaguardia debe demostrarse que existe una relación causal entre el incremento de las importaciones y el perjuicio.

82. Pueden adoptarse medidas de salvaguardia provisionales que consisten en un incremento del arancel, garantizado mediante un depósito que se devuelve si no se demuestra el perjuicio. Esas medidas transitorias no deben aplicarse durante más de 200 días. Es posible aplicar medidas de salvaguardia a las mercancías procedentes de cualquier origen. Sin embargo, las medidas de salvaguardia se aplicarán a un país en desarrollo de conformidad con los requisitos del Acuerdo de la OMC.

83. Antes de prorrogar o adoptar una medida de salvaguardia definitiva está previsto un plazo de 30 días para la celebración de consultas con los Miembros interesados de la OMC. Las medidas de

⁵¹El artículo 25 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano (de 29 de enero de 1993) regulaba las prácticas comerciales desleales y las cláusulas de salvaguardia entre los países centroamericanos. Ese artículo ha sido abrogado por el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio, de 5 de diciembre de 1995.

⁵²Resolución N° 101, Ministerio de Economía, Diario Oficial N° 53, de 15 de marzo de 1996.

⁵³Acuerdo Ejecutivo N° 213, Diario Oficial N° 110, de 14 de junio de 1996.

salvaguardia deben considerarse excepcionales y temporales, puesto que se mantendrán sólo mientras sean necesarias para prevenir un perjuicio, reparar un perjuicio grave y permitir el reajuste. Las medidas de salvaguardia permanentes no deben tener una vigencia que exceda de cuatro años como máximo, pero pueden prorrogarse de conformidad con el Acuerdo de la OMC.

84. La adopción de cualquier medida de salvaguardia ha de notificarse al Consejo Ejecutivo de Integración Económica y a la OMC.

85. Las disposiciones de salvaguardia especial del Acuerdo de la Ronda Uruguay sobre la Agricultura, que permiten la imposición de un derecho adicional sobre el nivel arancelario consolidado cuando las importaciones alcancen un nivel de activación establecido o sean inferiores a un precio determinado, abarcan 84 líneas arancelarias.

xix) Medidas aplicadas en los países exportadores

86. El Salvador no ha concluido acuerdos que limiten las exportaciones de mercancías de sus asociados comerciales extranjeros.

xx) Medidas en materia de balanza de pagos

87. El Salvador no mantiene restricciones a la importación por motivos de balanza de pagos.

xxi) Privilegios de importación concedidos a zonas francas

88. Las mercancías tales como la maquinaria, el equipo, las herramientas, las piezas de recambio y los utensilios necesarios para la instalación y funcionamiento de empresas establecidas en las zonas francas y en las zonas denominadas recintos fiscales pueden importarse en esas zonas aduaneras con exención de derechos.⁵⁴ Las empresas que exporten el 100 por ciento de su producción pueden importar todas las mercancías antes mencionadas, además de los insumos necesarios para su proceso de producción, con franquicia arancelaria.⁵⁵

3) Medidas que afectan directamente a las exportaciones

89. La política de exportación de El Salvador está centrada en la promoción de las exportaciones de mercancías no tradicionales (es decir, todas las mercancías excepto el café, el algodón y el azúcar) a mercados fuera de Centroamérica. Esta política se aplica principalmente mediante un marco legal especial constituido por la Ley de Reactivación de las Exportaciones, la Ley del Régimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales y sus reglamentos. El procedimiento de obtención de las autorizaciones de exportación se ha simplificado mediante el establecimiento de una "ventanilla única" en el Centro de Trámites de Exportación (CENTREX) del Banco Central (recuadro III.1). Esas reformas, junto con la abolición de los controles del tipo de cambio, la privatización del sistema bancario y la racionalización del régimen de importación, deben permitir la atenuación de la actual tendencia contraria a la exportación.

⁵⁴Artículo 11, Decreto N° 461, Ley del Régimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales, de 15 de marzo de 1990.

⁵⁵Artículo 19, Decreto N° 461, Ley del Régimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales, de 15 de marzo de 1990.

Recuadro III.1: Centro de Trámites de Exportación (CENTREX)

El CENTREX se estableció en 1987 como una institución destinada a centralizar la tramitación de todos los permisos de importación y exportación. Antes de la creación del Centro la preparación de la documentación llevaba entre ocho a 10 (e incluso 15) días. En un principio el Centro no funcionó adecuadamente porque fue todavía necesario establecer contacto con cierto número de otras instituciones. En promedio debían presentarse 25 documentos a las diferentes instituciones y el proceso llevaba aproximadamente dos días.

Para simplificar las formalidades el CENTREX se reestructuró en 1989. Desde ese año la institución, administrada por el Banco de Reserva Central bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía, ha funcionado como una ventanilla única en la que pueden llevarse a cabo todas las formalidades para la exportación. Así pues, el CENTREX desempeña las funciones de las tres principales instituciones directamente responsables de la expedición de la documentación para la exportación: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Dirección de Sanidad Vegetal y Animal y Centro para el Desarrollo de las Pesquerías), el Ministerio de Economía (Dirección de Inversiones y Comercio) y el Banco Central. Otras instituciones, tales como las aduanas y el Ministerio de Hacienda, colaboran estrechamente con el CENTREX.

En diciembre de 1995 el CENTREX estableció el Sistema Electrónico de Exportaciones (SIEX) para acelerar las formalidades de exportación. Este servicio permite a las empresas obtener unas pólizas de exportación automáticas de manera ininterrumpida durante siete días por semana. En caso de que sea necesario un certificado sanitario que deba firmarse, tal certificado quedará preparado el mismo día, o el primer día laboral que siga a la petición. El establecimiento del SIEX ha reducido el tiempo de preparación de la documentación para la exportación a menos de un día.

i) Registro y documentación

90. Todos los exportadores deben inscribirse en un registro rellenando la Tarjeta de Inscripción de Exportador. Una vez registrados, el CENTREX expide los documentos de exportación a los exportadores que hayan presentado una solicitud de exportación y una factura comercial. Ese procedimiento es el mismo para las exportaciones tradicionales y las no tradicionales.⁵⁶ Entre los documentos necesarios para la exportación figura el formulario del registro de exportación y/o un formulario de aduanas (para las exportaciones dentro del Mercado Común Centroamericano) y, en su caso, los certificados que exijan los países importadores, por ejemplo, los certificados de origen o los certificados sanitarios. Desde agosto de 1996, para las exportaciones a los demás países del MCCA es preciso el Formulario Aduanero Único Centroamericano, que es también un certificado de origen.

91. Para la exportación de productos agroquímicos, medicinas, alimentos para animales, carne, pescado, café y maquinaria es necesario un certificado sanitario expedido por el Ministerio de Agricultura.

⁵⁶Las exportaciones se clasifican además en definitivas y no definitivas. Las exportaciones definitivas son las obtenidas o fabricadas en El Salvador con por lo menos un 35 por ciento de valor añadido, y las exportaciones no definitivas abarcan las exportaciones temporales, las reexportaciones, las operaciones de trueque, las donaciones, las muestras comerciales y las operaciones de montaje (maquila). Para estas últimas hay que llevar a cabo diferentes formalidades en el momento de la exportación.

ii) Impuestos, cargas y gravámenes a la exportación

92. Actualmente no se aplican impuestos a la exportación. Los impuestos de exportación sobre el azúcar y las gambas se suprimieron en 1989⁵⁷ y los aplicados al café en 1992.⁵⁸

iii) Precios mínimos

93. No se aplican precios mínimos a las exportaciones.

iv) Prohibiciones de la exportación y otros controles

94. Está prohibida la exportación de gas líquido y controlada la de diesel, pues ambos productos están subvencionados. Se subvenciona el diesel para el transporte público y el gas para el consumo doméstico. El diesel no subvencionado, es decir, el que se destina a usos distintos del transporte público, puede exportarse si está producido en la refinería nacional o se trata de la reexportación de diesel importado. Sin embargo, para que sea posible la exportación de este diesel es precisa una evaluación de la oferta nacional de diesel. La exportación de plantas y animales en peligro de extinción también está prohibida de conformidad con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que El Salvador ha ratificado en 1986.⁵⁹

95. Es necesario un permiso de exportación para determinadas mercancías, por ejemplo, las exportaciones de cemento Portland, ladrillos refractarios y caña de azúcar debe autorizarlas el Ministerio de Economía para asegurar un abastecimiento suficiente del país. En el caso de la caña de azúcar, el permiso también se utiliza para garantizar el cumplimiento del contingente que disfruta de un acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos. Para las exportaciones de textiles producidos en las zonas francas y que estén sometidos a un contingente en el mercado de los Estados Unidos también se precisa un permiso del Ministerio de Economía.

v) Licencias de exportación

96. No se exigen licencias de exportación en sí mismas. Para los productos cuya importación esté limitada en otros países (tales como los textiles y el azúcar) puede ser necesario un documento para su exportación que muestre el derecho a un contingente, como se ha señalado antes.

vi) Contingentes de exportación

97. El Salvador limitó el volumen de las exportaciones de café en las campañas de 1993/94, 1994/95 y 1995/96, con el fin de cumplir sus compromisos de conformidad con el plan de retención de la Asociación de Países Productores de Café (APPC).⁶⁰ Para la campaña de 1996/97, el contingente de exportación del El Salvador, establecido por la APPC, se elevará a 3 millones de quintales. El objetivo del Plan es mantener el precio internacional del café mediante el control de la oferta. Todos los años se promulga un decreto para determinar el volumen del contingente de exportación y su distribución

⁵⁷Decreto Legislativo N° 396, Diario Oficial N° 231, de 13 de diciembre de 1989.

⁵⁸Decreto Legislativo N° 422, Diario Oficial N° 236, de 22 de diciembre de 1992.

⁵⁹Diario Oficial N° 93, de 23 de mayo de 1986.

⁶⁰Decreto N° 26, Diario Oficial N° 148, 15 de agosto de 1994.

entre los productores nacionales.⁶¹ El Consejo Salvadoreño de Café (CSC) está encargado de la administración y asignación de los contingentes de exportación.

vii) Cárteles de exportación

98. No existen cárteles de exportación en El Salvador.

viii) Limitaciones voluntarias, vigilancia y medidas similares

99. En el marco del Acuerdo Multifibras (AMF), que expiró al final de 1994, El Salvador había firmado un acuerdo bilateral de exportación con los Estados Unidos. Ese acuerdo preveía la concesión de contingentes en el mercado de los Estados Unidos para las camisas de algodón y fibras sintéticas o artificiales para hombres y muchachos, excepto de punto (categorías 340/640). Ese contingente se incluyó en el Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el Vestido.⁶² En 1995 y 1996 El Salvador concluyó unos acuerdos bilaterales adicionales con los Estados Unidos referentes a las importaciones de prendas interiores de algodón y fibras sintéticas o artificiales (categorías 352/652), camisones y pijamas de algodón y fibras sintéticas o artificiales (categorías 351/651), y faldas de algodón y fibras sintéticas o artificiales (categorías 342/642). Esos contingentes de exportación los distribuye el Ministerio de Economía según el porcentaje de producción total de cada empresa.

ix) Medidas que mantienen los países importadores

100. Las exportaciones de azúcar al mercado preferencial de los Estados Unidos están sometidas a contingentes. El Ministerio de Economía es el encargado de distribuir esos contingentes entre los ingenios azucareros. La asignación concreta de los contingentes se basa en la proporción en que cada ingenio participa en la producción total de azúcar. La Comisión Salvadoreña para el Desarrollo del Sector del Azúcar asesora al Gobierno.

x) Subvenciones a la exportación

101. En El Salvador no se otorgan subvenciones explícitas a la exportación. Sin embargo, el reintegro de derechos que se concede a los exportadores de mercancías de conformidad con la Ley de Reactivación de las Exportaciones constituye un reembolso que puede ser más o menos equivalente al derecho arancelario verdaderamente pagado por los insumos asociados con cada envío de exportación concreto (véase *infra*).

xi) Concesiones arancelarias y fiscales

102. La Ley de Reactivación de las Exportaciones, modificada por varios decretos⁶³, prevé una serie de exenciones fiscales y un sistema de reintegro de derechos para los exportadores de productos no

⁶¹El Decreto N° 667, Diario Oficial N° 186, de 6 de octubre de 1993, y el Decreto N° 241, Diario Oficial N° 241, de 23 de enero de 1995, son disposiciones transitorias que regulan la cantidad de café cosechado durante las campañas de 1993/94 y 1994/95 que puede ser exportado. El Decreto N° 441, Diario Oficial N° 141, de 29 de julio de 1995, es otra disposición transitoria que distribuye el contingente de exportación entre los productores.

⁶²G/TMB/N/63/Add.2.

⁶³Decreto N° 460, Diario Oficial N° 88, de 18 de abril de 1990, modificado por el Decreto N° 381, Diario Oficial N° 225, de 7 de diciembre de 1992 y el Decreto N° 749 (cuya fecha no se ha facilitado).

tradicionales (es decir, los productos distintos del café, el azúcar y el algodón) a mercados fuera de Centroamérica. Esos exportadores pueden obtener un reembolso fijo equivalente a un 6 por ciento del valor f.o.b. de las exportaciones como compensación del pago de derechos de importación. Para conseguir ese reembolso, el exportador debe probar que las mercancías han sido exportadas y los derechos de importación satisfechos.

103. Los exportadores de productos tradicionales (por ejemplo, el café, el algodón y el azúcar) con un valor añadido mínimo en el país de un 30 por ciento también tienen derecho al reembolso de un 6 por ciento del valor f.o.b. de las exportaciones.

104. Las empresas que se dediquen parcial o temporalmente a operaciones de montaje (maquila) también pueden obtener el reintegro de un 6 por ciento sobre la base del valor añadido en el país, a pesar de que importen según un régimen de admisión temporal (es decir, con exención de derechos).

105. Todas las exportaciones están exentas del pago del IVA.

xii) Financiación de las exportaciones

106. El Banco de Inversiones Multisectoriales se ocupa de un fondo especial de inversiones con diferentes programas de financiación para el sector exportador. Existen líneas de crédito específicas para los proyectos que exporten más del 50 por ciento de su producción, para las industrias y empresas agrícolas que exporten productos no tradicionales fuera de Centroamérica, para el desarrollo de zonas francas privadas y para las exportaciones de servicios fuera de Centroamérica.

107. Los tipos de interés de esas líneas de crédito no son preferenciales. Los tipos de interés para los préstamos en moneda nacional se fijan cada tres meses sobre la base del tipo del mercado a 180 días. Los intereses para los préstamos en dólares de los Estados Unidos se basan en los intereses existentes en el mercado internacional, más un porcentaje para cubrir los costos financieros y administrativos y los riesgos.

xiii) Seguro y garantía de las exportaciones

108. El Gobierno no financia ningún sistema de seguro y garantía de las exportaciones.

xiv) Promoción de las exportaciones y ayuda a la comercialización

109. Las instituciones encargadas de la promoción de las exportaciones y de la ayuda a la comercialización son la Dirección de Comercio e Inversión del Ministerio de Economía, la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), el Programa de Promoción de Inversiones y Diversificación de Exportaciones (PRIDEX/FUSADES), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).

110. En 1995 el Ministerio de Economía estableció el Consejo de Competitividad, con la función principalmente de prestar apoyo a la inversión y los proyectos de promoción de las exportaciones.

xv) Prescripciones en materia de resultados de exportación

111. El Salvador no tiene ninguna prescripción en materia de resultados de exportación.

xvi) Zonas francas y recintos fiscales

112. En 1974 el Gobierno estableció la primera zona franca, San Bartolo, con el objetivo de estimular las exportaciones. Actualmente la zona está en curso de privatización.⁶⁴ Existen hoy día otras cinco zonas francas privadas en funcionamiento y otras cuatro están en construcción (cuadro III.3). De las 45 empresas que operan según este régimen 37 (aproximadamente un 82 por ciento) producen textiles y prendas de vestir. Las ocho restantes fabrican productos electrónicos, productos de papel, estuches de joyería, productos cerámicos, guantes de piel, productos plásticos, y ofrecen servicios de reparación de juguetes.

Cuadro III.3
Actividades de las zonas francas, mayo de 1996

	Zonas francas						Total
	San Bartolo	San Marcos	El Progreso	El Pedregal	Exporsalva	American Park	
Superficie (m ²)	224.393	48.000	14.740	166.480	120.000	125.000	698.613
Superficie ocupada (en porcentaje)	35,0	73,0	100	29,3	20,3	...	40,0
Número de empresas	12	9	5	11	7	1	45
Textiles	8	9	4	8	7	1	37
Productos de cuero	1	0	0	0	0	0	1
Componentes eléctricos	1	0	0	0	0	0	1
Sacos de papel	1	0	0	0	0	0	1
Guantes	0	0	0	1	0	0	1
Estatuas cerámicas	0	0	0	1	0	0	1
Estuches de joyería	1	0	0	0	0	0	1
Productos plásticos	0	0	1	0	0	0	1
Servicios de reparación de juguetes	0	0	0	1	0	0	1
Empleos directos	7.875	5.169	3.525	4.240	3.179	188	24.176
Empleos indirectos	15.750	10.338	7.050	8.480	6.358	376	43.352

... No disponible.

Fuente: Departamento de Zonas Francas.

113. A pesar de la concentración de la producción en un número relativamente pequeño de mercancías, las autoridades consideran que las zonas francas han aumentado el dinamismo de la economía salvadoreña al promover las exportaciones no tradicionales y generar empleo (cuadro III.3). En la actualidad las zonas francas emplean unas 67.500 personas y el Departamento de Zonas de Francas ha estimado que las zonas en construcción proporcionarán casi 79.000 nuevos empleos. Las exportaciones de las zonas francas (maquiladoras) se han incrementado acentuadamente desde un 18 por ciento del total en 1991 a un 39 por ciento en 1995 (cuadro III.4).

⁶⁴Dijkstra y Rivera Alemán, (sin fecha).

Cuadro III.4**Exportaciones de El Salvador por tipos, 1991-95**
(en millones de dólares EE.UU.)

	Tradicionales	No tradicionales	Zona franca (maquila)	Total
1991	272,1	315,9	132,0	720,0
1992	217,3	380,2	198,0	795,5
1993	295,7	446,3	290,1	1.032,1
1994	321,2	496,5	431,4	1.249,1
1995 ^a	370,9	479,0	537,8	1.387,6

a enero-octubre.

Fuente: Banco Central de la Reserva de El Salvador (1995).

114. Las operaciones de las zonas francas y los recintos fiscales están regidas por el Decreto N° 461 de 1990 y su Reglamento.⁶⁵ Además, otras leyes nacionales tales como las referentes a la seguridad social y el Código de trabajo son de aplicación a las zonas francas y los recintos fiscales, lo mismo que en el territorio aduanero salvadoreño. Las empresas nacionales y extranjeras pueden acogerse a los beneficios aplicables a las zonas francas si el 100 por ciento de su producción de mercancías y/o servicios no tradicionales se exporta a mercados situados fuera de Centroamérica. La designación de recinto fiscal se extiende a aquellas empresas que por razones técnicas no puedan establecerse en una zona franca, pero que por lo demás tendrían derecho a los beneficios derivados de ese régimen. Todas las empresas establecidas en una zona franca o comprendidas en un recinto fiscal, cualquiera que sea su ubicación, están exentas de los derechos e impuestos indicados en el cuadro III.5. Sin embargo, esas empresas no tienen derecho a los beneficios estipulados en la Ley de Reactivación de las Exportaciones, pues los dos sistemas se excluyen mutuamente.

Cuadro III.5**Exenciones concedidas a las zonas francas y recintos fiscales**

Impuestos y otros gravámenes
Impuesto sobre la renta ^a
Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
Derechos de importación sobre la maquinaria, el equipo, las herramientas y otros insumos necesarios
Derechos de importación sobre el material de embalaje y otras mercancías similares
Impuestos de importación sobre los combustibles y lubricantes ^a , en caso de carecerse de ellos en el país
Impuestos municipales

a Este beneficio se concede por un período renovable de 10 años, contado a partir del primer día de la producción.

Fuente: Ley sobre las Zonas Francas y Recintos Fiscales, Decreto N° 461.

⁶⁵Ley relativa al régimen de zona franca y recinto fiscal, Decreto N° 461, Diario Oficial N° 88, de 18 de abril de 1990. Reglamento de la Ley relativa a las zonas francas y recintos fiscales, Decreto N° 56, Diario Oficial N° 241, de 16 de octubre de 1990.

115. Los privilegios otorgados a las zonas francas y los recintos fiscales no son de aplicación a las agencias de viajes, las compañías aéreas, las empresas de transporte terrestre, marítimo o aéreo, o las compañías proveedoras de servicios, las cuales se rigen por las leyes salvadoreñas relativas a la banca y las finanzas. Otras actividades que no pueden realizarse en una zona franca son en especial la explotación de petróleo, gas natural y minerales; las pesquerías; los hoteles; la elaboración de explosivos o materiales radiactivos; la producción de materiales contaminantes; la cría, cultivo, transformación y venta de especies amenazadas de fauna y flora silvestres; y los servicios no vinculados al comercio exterior.

116. Las empresas comprendidas en uno de esos dos regímenes pueden subcontratar servicios en El Salvador. También es posible transferir mercancías desde El Salvador a una zona franca o recinto fiscal para su perfeccionamiento, transformación o reparación. Sin embargo, las empresas situadas en una zona franca o recinto fiscal deben pagar los derechos de importación sobre las mercancías adquiridas de esa manera.

117. Una "exportación" desde El Salvador a una de sus zonas francas o uno de sus recintos fiscales se considera que es una exportación fuera de Centroamérica, con la excepción de la subcontratación de servicios. Los incentivos previstos en la Ley de Reactivación de las Exportaciones son también de aplicación a los exportadores salvadoreños que envíen sus mercancías a las zonas francas o recintos fiscales.

118. El 15 por ciento de la producción de las zonas francas puede exportarse a El Salvador y Centroamérica, con excepción de los textiles, mediante el pago de todos los derechos e impuestos.

4) Medidas que afectan a la producción y el comercio

119. Como parte del programa de reformas iniciado en 1989, El Salvador ha adoptado una serie de políticas internas con el fin de permitir un mayor juego de las fuerzas del mercado dentro de la economía nacional, al mismo tiempo que el Estado proporciona el marco regulador. Los principales pasos dados a ese respecto han sido la eliminación de la mayor parte de los controles de precios (aunque los precios de algunos productos petrolíferos siguen controlados), el dismantelamiento de las juntas de comercialización agraria, de manera que corresponde ahora al sector privado la comercialización de las principales cosechas; y la privatización de determinados servicios, con inclusión de la banca y las telecomunicaciones.

120. Se están haciendo esfuerzos para robustecer la aplicación de la legislación vigente en materia de derechos de propiedad intelectual. De esa manera se incrementarán los esfuerzos de desarrollo, ya que la protección de los derechos de propiedad intelectual es con frecuencia una condición previa para la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología.

121. Debería considerarse el establecimiento de un marco efectivo para la política de la competencia (antitrust), cuya falta se hace sentir, excepto en el caso de la regulación y supervisión de determinadas industrias de servicios que disponen de su propio marco. La existencia de determinadas prácticas contrarias a la competencia podría ser un impedimento para el desarrollo de un sector de servicios de más amplia base y para los esfuerzos encaminados a la atracción de capital extranjero.

i) Asistencia para el reajuste

122. Según las autoridades, no existe ninguna política o medida específica destinada a apoyar la reestructuración de los diferentes sectores o industrias a los que ha afectado negativamente el programa de reajuste estructural iniciado en 1989. Sin embargo, existen programas más generales de asistencia

técnica y apoyo financiero para todas las industrias. Esos programas son administrados por el sector privado a través de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI).

123. No existen programas específicos de ayuda a la mano de obra desplazada por los cambios estructurales. Sin embargo, el Ministerio de Educación y la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE) han establecido y ofrecen cursos técnicos para el conjunto de la población.

ii) Ayuda para investigación y desarrollo

124. No existe ayuda para investigación y desarrollo en El Salvador.

iii) Subvenciones a la producción y concesiones fiscales

125. En 1989 fue abolida⁶⁶ la abundante legislación que preveía concesiones arancelarias y fiscales para una gran variedad de actividades productivas. Las autoridades consideraron que la eliminación de esas concesiones era necesaria para crear un sistema más neutral para el conjunto de los sectores e incrementar los ingresos fiscales.

iv) Normas de competencia

126. El artículo 110 de la Constitución prohíbe las prácticas monopolísticas, pero no existen medidas legislativas complementarias que promuevan la libre competencia o regulen las condiciones de la competencia en el mercado salvadoreño. Según el Banco Mundial, es necesaria una detallada ley antitrust porque la debilidad de la competencia en el mercado salvadoreño parece plantear un serio problema.⁶⁷

127. Además, algunas políticas han contribuido a fomentar una conducta contraria a la competencia. Por ejemplo, el requisito de una licencia de importación para los sacos de yute y el impuesto adicional aplicado a los sacos sintéticos han contribuido a la creación de un duopolio en ese mercado. En el sector de los servicios, se aprecia una conducta contraria a la competencia en varias esferas. Aunque se está desmantelando el monopolio estatal de las telecomunicaciones, la empresa va a venderse en primer lugar sólo a dos compañías. La generación de electricidad está todavía principalmente en manos del sector público. En el sector financiero las limitaciones para que los bancos y las compañías financieras pasen a manos extranjeras, que obligan a los bancos extranjeros a ser asociados minoritarios, son un impedimento para el establecimiento de la competencia extranjera en este sector. En realidad, no existen bancos extranjeros en El Salvador.

v) Acuerdos sobre fijación de precios y comercialización

128. En 1989 se suprimieron 240 controles de precios de mercancías de consumo y los monopolios nacionales para la comercialización del café, el azúcar y el algodón.⁶⁸ Sin embargo, el Ministerio de

⁶⁶Decreto N° 385, Diario Oficial N° 227, de 1° de noviembre de 1989.

⁶⁷Banco Mundial (1995).

⁶⁸Business America, 25 de marzo de 1991, "Market Reforms in El Salvador Mean New Opportunities for US Business".

Economía está todavía facultado, en caso de emergencia nacional, a fijar y modificar los precios mínimos y máximos de los bienes intermedios y finales de primera necesidad.⁶⁹

129. En la práctica, las únicas mercancías actualmente objeto de controles de precios son los productos petrolíferos. Desde 1995 está en funcionamiento un mecanismo automático para determinar el precio máximo que los importadores y las refinerías pueden cobrar a los distribuidores de productos petrolíferos.⁷⁰ El Ministerio de Economía determina ese precio y periódicamente lo comunica por escrito a los importadores y distribuidores. También se fijan los precios al por menor del diesel y el gas líquido.⁷¹

130. Durante el período 1980-1989 el Estado controló la comercialización de los productos agrícolas más importantes. Sin embargo, a partir de 1989 se dismantelaron las juntas de comercialización del café, el azúcar, el algodón, la leche en polvo y los cereales comunes, y se permitió al sector privado la venta de esos productos tanto en el mercado nacional como en el internacional.

vi) Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (MIC)

131. El Salvador no ha hecho ninguna notificación de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo de la OMC sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio. El Salvador no aplica políticas incompatibles con la obligación del trato nacional (por ejemplo, sistemas de contenido nacional, prescripciones en materia de exportación, etc.) o con la eliminación general de las restricciones cuantitativas a las importaciones y exportaciones (por ejemplo, El Salvador no aplica ninguna MIC).

vii) Protección de la propiedad intelectual

132. En 1993 la nueva Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Intelectual entró en vigor.⁷² Sin embargo, la aplicación de esa ley ha resultado difícil porque la Policía Nacional Civil (PNC) no dispone de los recursos necesarios para inspeccionar todos los establecimientos sospechosos y con frecuencia desconoce que se ha infringido la ley. Según las autoridades la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Registro prestan un especial apoyo a la PNC con el fin de aplicar la ley con mayor vigor. Además, las personas víctimas de infracciones de los derechos de autor, patentes, etc., aparentemente no denuncian siempre los hechos. No obstante, en los casos en que se han presentado denuncias, se han confiscado las mercancías y condenado a sus productores. Por ejemplo, en 1995 los utilizadores ilícitos de marcas comerciales tales como Levi's, Reebok y Burger King fueron procesados.

133. En la actualidad, el principal problema en materia de violaciones de derechos de autor es la piratería de cintas musicales y vídeo. La piratería de esas mercancías llegó a ser especialmente importante durante la guerra civil y se ha desarrollado sobre todo al nivel de las microempresas del sector informal. Esas microempresas tienen dificultades respecto de la adquisición de las licencias necesarias para la utilización de marcas de fábrica, etc. Así pues, la ejecución estricta de la ley podría

⁶⁹Artículo 5, Decreto N° 666, Ley de Protección al Consumidor, de 14 de marzo de 1996.

⁷⁰Acuerdo N° 46, de 27 de enero de 1995.

⁷¹Acuerdo N° 643, Diario Oficial N° 161, de 1° de septiembre de 1995.

⁷²Decreto N° 604, Diario Oficial N° 150, de 16 de agosto de 1993.

tener importantes consecuencias sociales. A pesar de ello, desde principios de 1996 las autoridades parecen más decididas a aplicar la ley.⁷³ Por ejemplo, durante el mes de febrero se confiscaron varios miles de cintas musicales y vídeo, se clausuraron establecimientos y se procesó a sus propietarios.⁷⁴

134. Además, las autoridades están exigiendo el requisito de la inscripción en el Registro de Comercio, la entidad que está encargada de supervisar a las personas que utilizan material protegido. Según el artículo 11 del reglamento de aplicación los contratos o licencias de compañías musicales o de vídeo que otorguen el derecho de reproducción del material deben inscribirse en el Registro. Sin embargo, ninguna empresa musical o de vídeo de El Salvador se ha registrado todavía.⁷⁵

135. Según las autoridades la nueva ley está en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 109 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Intelectual estipula que una patente tiene una duración de 20 años en el caso de todos los productos con excepción de las medicinas, mientras que el Acuerdo de la OMC estipula 20 años para todas las patentes. El Salvador tiene tiempo hasta el año 2000 para introducir todos los cambios necesarios, pero de todas maneras según la legislación salvadoreña, el Acuerdo sobre los ADPIC, en cuanto tratado internacional, tiene preferencia sobre la legislación nacional.

136. El Salvador también ha firmado varios convenios en materia de propiedad intelectual, por ejemplo, el Convenio de París, la Convención Universal sobre Derecho de Autor y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

⁷³Parece que los Estados Unidos han insistido en que se respeten los derechos de autor y han amenazado con retirar el trato preferencial del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) (La Prensa Gráfica, de 26 de febrero de 1996, página 32-A).

⁷⁴La Prensa Gráfica, de 29 de febrero de 1996, página 6-A.

⁷⁵El Diario de Hoy, de 23 de febrero de 1996, página 24.